



**POLITICA DE AJUSTE
Y HUELGA GENERAL**

LAS AGUAS BAJAN TURBIAS

ARCHIVO TEA

El jueves 23 la sociedad argentina asiste a una pulseada entre dos sectores todavía difusos, aunque sus cabezas visibles sean el presidente Raúl Alfonsín y la cúpula de la CGT representada en esta emergencia por Saúl Ubaldini. Si se hace abstracción del intercambio de amenazas y epítetos, se podrá ver que tanto de un lado como del otro hay paisanos de varios pueblos, Capuletos y Montescos de linaje cruzado, tirtos y troyanos del subdesarrollo. En una situación de crisis no es de extrañar que la recomposición política se acelere hasta el vértigo, pero es esta misma aceleración la que enturbia las aguas y no siempre permite ver claro.

Una de las pocas coincidencias comunes a todo el tablero político ha sido, en los últimos días, el reconocimiento de la legitimidad de los reclamos expresados en la convocatoria de la central obrera, aunque esta coincidencia no se hace extensiva al rubro *intenciones*. Intenciones al margen, entonces, es innegable que el salario real ha caído y nada indica que pueda recuperarse o cuando menos estabilizarse en sus marcas actuales. La desocupación es un guarismo en alza, tanto como los precios y las tasas de interés. La amenaza de quiebras en cadena se ha extendido de las empresas industriales a los bancos. Las obras públicas están poco menos que paralizadas y no se proyectan —con buen criterio aunque con pésimo pronóstico— otras nuevas. Las reservas de divisas son un cerro gigante, la deuda externa del país sigue aumentando mientras la deuda privada —interna y externa— pugna por volverse pública.

En este cuadro de situación someramente esbozado, a nadie puede sorprender que un considerable sector del país le pida cuentas a un presidente que adjudicó

La huelga y movilización del jueves 23 ha inyectado un chorro de alta presión en las cañerías de la sociedad argentina. Hay demócratas que defienden el ajuste ortodoxo y demócratas que plantean la nacionalización de la economía. Todos los liberales defienden el ajuste, pero unos apoyan a la democracia y otros conspiran discretamente contra ella. El establishment se ampara en el FMI y —por ahora— deja ser a la democracia. La derecha peronista hace exactamente lo contrario. ¿Quién es quién en esta sociedad argentina sacudida por la crisis?

a la democracia la capacidad de dar trabajo, comida, educación y salud. Se reclama por un bienestar prometido y negado, pero en el carro del reclamo no sólo viajan los perjudicados por la política oficial sino también, y paradójicamente, muchos de sus beneficiarios.

Y aquí el agua se transforma en barro. No se entiende por qué la Unión Industrial (UIA) y la Sociedad Rural (SRA) están en desacuerdo con la aplicación de la misma política económica que ellos preconizan (*gross modo*: reducción del salario real, sosten a la especulación financiera, obediencia al FMI, devaluación del peso, orientación productiva hacia las exportaciones y achicamiento del mercado interno). No se entiende bien a menos que, como se sospecha, estas dos iglesias del liberalismo argentino pretendan un plan todavía más recesivo y sin ningún adorno populista, como el que preconiza el cordo-

bés Domingo Cavallo, para lo cual no vendría nada mal que Sourrouille y sus amigos volvieran al sosegado oficio de elaborar planes que nadie tomará en serio.

En cambio, resulta coherente que el peronismo renovador, los intransigentes, comunistas y socialistas vayan a la Plaza de Mayo a exteriorizar su protesta, como que son los mismos que la abandonaron cuando Raúl Alfonsín anunció la economía de guerra y oficializó el plan recesivo. Este bloque —promotor de la Multipartidaria— coincide plenamente con el gobierno en la defensa de la democracia, pero disiente también plenamente en cuanto a la política económica, y con distintos matices plantea la nacionalización de la banca y el comercio exterior y la moratoria unilateral de la deuda, sostiene la defensa de la moneda nacional y del mercado interno.

Otro segmento, básicamente compuesto por la derecha peronista, se apoya

en un nacionalismo formal para denunciar las prácticas usurarias del FMI, pero no es fanático de la democracia ni procura hacerse creer a nadie. En el otro polo del espectro, el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Partido Obrero (PO) denostan al gobierno de arriba a abajo y, como es obvio, también irán a la plaza. Estos dos sectores muestran una rara coincidencia: no están de acuerdo con nada de lo que hace el gobierno, ni siquiera con aquellas cosas que hace más o menos bien y que por cierto no son secundarias, como juzgar a los ex comandantes, garantizar el estado de derecho y las libertades individuales.

De hecho, como ocurre siempre antes que los discursos consagren situaciones en el plano de las ideas, existen pistas suficientes para intentar una divisoria de aguas o cuando menos un rompeolas que diferencie posturas públicas de conductas concretas.

Ningún corte horizontal de la política argentina permite entender la recomposición mencionada al comienzo. Ser peronista o radical, sindicalista o empresario, militar o sacerdote no es, hoy por hoy, un dato que por sí mismo informe gran cosa sobre el proyecto de quien así se defina. Para aproximarse a la realidad política es necesario practicar un corte vertical que separe a los peronistas que están por la liberación nacional de aquellos otros que se atrincheran en el populismo conservador, cuando no en el fascismo. Del mismo modo, hay radicales dispuestos a pelear por la soberanía económica del país y hay otros radicales dispuestos a pelearse con los anteriores por eso. Lo mismo vale para diferenciar a los sacerdotes que quieren una Iglesia progresista de aquellos otros que la reclaman tradicional y, desde ya, para distinguir a los militares que apoyan a

la democracia de los que van en busca del autoritarismo perdido. Los empresarios tampoco son una excepción: Guillermo Alchourrón (SRA) y Humberto Volando (Confederación Agraria Argentina) no tienen en común más que dos pedazos de tierra de diferente tamaño, mientras los industriales que siguen a Roberto Favelevic tienen poco que decirse con los que se nuclean en la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA).

En el caso particular de la CGT, las contradicciones internas también se organizan en torno a los mismos ejes: democracia o autoritarismo, liberación nacional o continuidad de la dependencia. Si el sector de los 25 (Rodríguez-Digón-De Gennaro) ya ha dado pruebas suficientes de su alineamiento en el bloque democrático y progresista, Gestión y Trabajo (Triaca-Baldassini) ha dado las suyas en el sentido contrario, articulando una curiosa fórmula peronista-liberal que, como se vio, no tiene empacho en negociar con la SRA y la UIA como tampoco en desconocer públicamente la existencia de miles de obreros desaparecidos. El grupo de sindicatos —todavía poderoso— que responde a Lorenzo Miguel tiene las cuentas claras desde hace tiempo. En el plano político ha roto con Herminio Iglesias para reiniciar contactos con los renovadores, pero en el plano sindical no ha renunciado a ninguno de los apellidos vinculados con prácticas burocráticas y patoterías, fundadamente sospechosos de mantener amistades particulares con ciertos generales retirados. En lo político-económico no se ha alejado gran cosa de las ideas desarrollistas —vanderistas—, pero ocurre que el desarrollismo se ha aproximado mucho a Herminio Iglesias.

Obstruido considerablemente el espacio de maniobra del peronismo renovador por una incomprensible vacilación judicial; y objetivamente favorecido por el giro liberal del gobierno en lo económico, el *miguelismo* empieza a levantar vuelo otra vez, aunque es un ave fénix con las alas chamuscadas.

Si la seguridad de una sonora rechifla no le permite a Miguel presentarse en público, éste no es el caso de Ubaldini, el dirigente sindical más popular del país. Pero aun el consenso más sólido —recordar que en su caso la popularidad tiene como contrapartida la carencia de una estructura sindical propia— no es suficiente para asimilar un discurso que, deliberado

o por error, ha puesto condiciones a la continuidad del gobierno. Un punto en contra. La ratificación del *ultimatum* formulada en Mendoza le ha sumado otro punto en contra y van dos. En la más benévola de las lecturas, el dirigente cervecero *habría querido decir que si el equipo económico no cambia de política, se tendrá que ir*. Un dirigente con la experiencia de Ubaldini, que no es tanta pero sí suficiente, no podía ignorar que con esa desafortunada intervención le estaba dando al gobierno una herramienta política con la que hasta la semana anterior no contaba: la posibilidad de agitar ante la opinión pública la *intención desestabilizadora* de la huelga y concentración del jueves.

Alfonsín, que sí tiene mucha experiencia política, no desperdició esa pelota que Ubaldini dejó picando en el área y empalmó un discurso de barricada que, si puede ser objetado en términos de la sobriedad a que obliga la investidura presidencial, fue efectivo porque operó sobre la piel hipersensible de una sociedad golpeada por la crisis y la incertidumbre.

Fuera del tono *bipartidista* que tuvo el enfrentamiento entre el presidente y el dirigente sindical, Oraldo Britos y Carlos Menem dieron una muestra de buen tino político y sentido de la medida cuando salieron a reclamarle prudencia a los dos, y Oscar Alende no dejó pasar la oportunidad para diferenciarse de ambos: el PI concurrirá a la plaza porque estima que la huelga es inobjetable y porque la política económica del gobierno ha legitimado la movilización, pero advirtió que una buena parte de la dirigencia sindical no está a la altura de las necesidades coyunturales ni de las reivindicaciones históricas de los trabajadores.

Más allá de lo que ocurra el jueves 23, la sociedad argentina seguirá dividida entre demócratas y autoritarios, entre demócratas y corporativistas, entre los que pugnan por recuperar la soberanía del país y los que se benefician con el *statu quo*, o lo toleran. Al bloque histórico que expresa los intereses populares no le será fácil sintetizar una posición común, compartida, pero ésta pasará necesariamente por la defensa irrestricta de la democracia y por la recuperación de los valores nacionales al servicio de una revolución tantas veces postergada. ♦♦

NORBERTO COLOMINAS

UCR POLITICOS Y TECNOCRATAS

El pragmatismo de los tecnócratas desprecia las fórmulas "partidistas" de solución a la crisis estructural. El olfato de los políticos aconseja no perder de vista la respuesta ideológica. Ambos sectores en el gobierno radical no se ponen de acuerdo en una serie de temas puntuales: la relación entre economía y política, los novedosos mecanismos de la dependencia, la naturaleza del proceso de concentración oligopólica y monopólica en el sistema argentino luego del esquema aplicado por los *Chicago boys*, la factibilidad de inversiones provenientes del norte capitalista y el margen potencial que tiene nuestro país de incorporarse a la división internacional del trabajo con democracia.

Las cinco claves de la discordia fueron esbozados por un encumbrado hombre del gobierno, atentamente escuchado por Raúl Alfonsín en los últimos tiempos, en una franca conversación con EL PERIODISTA. Sin desmentir totalmente su alineamiento con los grupos "tecnocráticos" que recorren el universo oficialista con la receta del "ajuste positivo", el alto funcionario aclaró, sin embargo, que su postura no significa necesariamente olvidarse de la política: "Es que hay fenómenos contemporáneos para los cuales el partido radical, y con mayor razón los demás, han perdido ca-

pacidad de análisis y diagnóstico", dijo. "La demagogia populista del antimperialismo —agregó— debe dejar paso a un relacionamiento posible entre los países periféricos y los centrales, sacando partido de las contradicciones en el Norte".

El desprecio casi visceral que sienten algunos funcionarios, aproximados últimamente al alfonsinismo, hacia la "política chica" que practicarían diversos niveles partidarios, es rotundamente rechazada por los dirigentes provenientes de la militancia histórica: "Sin visión política global no se entiende la economía y menos se puede hallar la base social capaz de generar una respuesta democrática (y no otra) a la crisis económica", replica otro funcionario orgulloso de su actitud militante y receloso de que los tecnócratas logren finalmente colocar el "caballo de Troya" del neoliberalismo kissingeriano.

Por estas horas, Juan Sourrouille recopila todos los datos necesarios para acercarle el "día 24" una interpretación al Presidente sobre la envergadura del paro obrero del día anterior. Es decir, el grado de rechazo motivado por su política, asumida por Alfonsín.

JOSE ANTONIO DIAZ



Escribe
CARLOS
GABETTA

Banderas caídas

La concentración del jueves 23 en plaza de Mayo habrá sido la primera respuesta política masiva a la decisión del presidente Alfonsín de dar la espalda a sus propuestas económicas electorales, expresada en esa misma plaza el 26 de abril. Mientras el gobierno siga por el camino actual, el hecho seguirá consumado: adiós a las ilusiones —y a la necesidad— de conformar un movimiento popular que abarque a todos los sectores nacionales y progresistas, capaz de luchar con posibilidades en los mil frentes de la crisis.

El primer efecto de aquella voltereta de Alfonsín fue sembrar el desconcierto y una progresiva división en sus propias filas. El segundo, ahora, que un heterogéneo frente opositor se consolide. Mientras tanto, la crisis se acentúa y nadie acierta a señalar con claridad una vía de salida posible. Gobierno y oposición confundidos, el panorama político se asemeja cada vez más a tantas veces reiterado en las últimas décadas: sobre un fondo de crisis —enormemente ampliada esta vez— partidos, corporaciones y gobierno entrecruzan espadas, mientras cunde el desaliento popular y se reorganizan aceleradamente los factores permanentes de poder, los mismos que provocaron la crisis y medraron con ella.

En plaza de Mayo pueden pasar muchas cosas (esta edición se cierra cuarenta y ocho horas antes), pero lo esencial puede señalarse desde ahora, y es una paradoja. Allí estarán, enfrentados, los dirigentes y activistas representantes de la enorme marea antidictatorial que hizo explotar las urnas el 30 de octubre de 1983. Unos en la plaza; otros detrás de los visillos de la Casa Rosada.

La paradoja no termina allí. En unos y otros quedará evidenciada la forma progresiva en que sus principales banderas fueron siendo arriadas por el trabajo de zapa del establishment en recomposición. El gobierno se habrá visto obligado a permanecer vergonzantemente oculto detrás de las ventanas de la Rosada porque su programa económico ya no es el de las grandes mayorías populares; porque no se atrevió, cuando la situación lo exigía y tenía todo a su favor, a galvanizar al pueblo detrás de un proyecto nacional. La CGT habrá gritado sus justas consignas, pero sus propuestas seguirán siendo tan huecas como los bombos que atronarán la plaza. Tramposas además: los principales asesores económicos de la central obrera responden a la Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural y adláteres (no es poco símbolo que uno de ellos sea Domingo Cavallo) y algunos de sus auspiciantes no son precisamente democráticos.

Ciertamente, ese no será el único aspecto de la cuestión. En la plaza estarán los partidos de izquierda y el peronismo nacional y popular. En la plaza no estarán millares de radicales, pero su corazón no estará tampoco dentro de la Rosada. Si el Partido Intransigente concurre al acto haciendo ex-

plicitas serias reservas, el alfonsinista Movimiento Nacional de Renovación Sindical no concurre, pero adhiere al paro porque considera justas sus reivindicaciones. Son sólo ejemplos de la manera en que el país que votó por la democracia y la independencia nacional está hoy entrampado y ante una falsa opción.

La responsabilidad de esta polarización de agoreras consecuencias la tiene sin duda el gobierno. En marzo de 1983, durante una gira europea, el entonces precandidato Raúl Alfonsín respondió así a una pregunta de quien esto escribe: "el país puede afrontar el pago de 1.500 millones de dólares anuales de la deuda externa, en concepto de intereses y capital, a través de una moratoria o concesión especial. Y habrá que delimitar la deuda legítima de la ilegítima. Un solo dólar por encima de esa cifra comprometería cualquier plan de reactivación económica". El abandono de ese propósito (reiterado, aunque no en cifras, durante la campaña electoral) provocó la disolución progresiva del movimiento nacional que proyectaba Alfonsín y que, con variantes de forma, goza de indudable consenso. Sin duda la realidad se mostró infinitamente más ardua y compleja que cualquier pronóstico, en primer lugar por la debilidad que exhiben los sectores nacionales al cabo de la dictadura: la clase trabajadora reducida y desorganizada, perdido y agotado el norte político que la guiara, el empresariado en ruinas, las fuerzas armadas derrotadas en una guerra, sumidas en la corrupción, las luchas intestinas y con la "guerra sucia" a cuestas.

Rehacer todo eso ante enemigos poderosos no es fácil para nadie. Es, al contrario, titánico. Alfonsín se dio una política clara para uno de los graves problemas —juicio a los responsables de la represión al cabo del cual el país podrá comenzar a restañar esas heridas y las fuerzas armadas a reinsertarse en la sociedad— y la lleva adelante con decisión. En el juicio a los nueve comandantes la sociedad toda, no sólo los militares, transpira sus miserias y grandezas. De un lado los militares, políticos, sindicalistas y empresarios del crimen y la corrupción, y del otro los militares, políticos, sindicalistas y empresarios de la democracia, la pacificación y la justicia. Es en la larga marcha de la reconstrucción y el sincero movimiento nacional donde se delimitan las aguas. Al abandonar sus propósitos en el terreno económico el gobierno renunció a la única salida posible y a crear el espacio concreto donde se vería a qué intereses responde cada cual. Quebró la pata esencial de su propia estrategia.

El resultado es esa discepoliana confusión de la plaza y la Casa Rosada, donde habrán estado presentes y ausentes tanto los partidarios de un proyecto democrático y liberador como los de otro autoritario y dependiente. Las banderas del '83 están por el momento caídas. El establishment, feliz, porque aquella marea se va convirtiendo en un río meandroso.



Escribe
ALVARO
ABOS

La democracia y el derecho de admisión

Por momentos, la democracia argentina parece una fiesta a la que algunos tienen la entrada prohibida. O por lo menos restringida por rígidos controles de admisión. Y para ello no hace falta hacer la diferencia dialéctica entre *democracia formal* y *democracia sustantiva*. Basta con leer la constitución (su mera letra) y confrontarla con la realidad.

En las vísperas de la huelga general del 23 de mayo, ciertas clases medias y su aparato comunicacional volvieron (como el pasado 3 de septiembre) a liberar su histeria antiobrera machacando sobre el increíble argumento —explícitamente consignado en el documento de la UCR— de que hacer una huelga en un régimen constitucional es golpista. ¿Acaso pensarán estas vestales democráticas que los trabajadores se batieron contra la dictadura al solo efecto de que los intelectuales podamos ver películas sin censura? La democracia (da vergüenza tener que escribir estas obviedades) es para todos. Una de las razones por las que los trabajadores lucharon por ella es para ejercer los derechos que son propios de ellos: declarar huelgas, recibir una retribución justa, negociar colectivamente, controlar la producción.

El derecho a la negociación colectiva, por ejemplo, no es una concesión graciosa que puede o no ser otorgada a los sindicatos, según sea el humor o los intereses coyunturales del gobierno. Es un derecho elemental garantizado por la constitución. No requiere ni siquiera de leyes que lo instrumenten. A pesar de lo cual la negociación colectiva está reglamentada en una ley desde 1953. La dictadura aplastó ese derecho. Que el gobierno democrático siga negándolo a pesar de estar la mayoría de los sindicatos normalizados hace ya muchos meses (algunos hace años) es un escándalo. Quizás se diga: la economía atraviesa una emergencia. El mecanismo de las convenciones colectivas, con su puja retributiva sectorial desarticulada la economía. En ese caso, para evitar la dispersión salarial, ¿por qué no son fijadas las retribuciones en una negociación global con la representación confederada de los sindicatos? Sería una manera de respetar al menos el espíritu de la garantía constitucional que es claramente violada con la fijación unilateral y autoritaria de los salarios por el mero imperio del poder. Y no se argumente que la CGT carece de representatividad legal: ello es convalidar la lógica perversa de la dictadura. La CGT actual (nos gusten o no sus miembros, sus actitudes, sus lenguajes) es la continuadora de la CGT legítima de 1976. Fue la dictadura quien la intervino, la confiscó, la ilegalizó.

Pero aun cuando se insistiera en la

coyuntural imposibilidad económica de la negociación colectiva, ¿por qué no se facultó la negociación colectiva para los temas no económicos? Las convenciones colectivas sirven fundamentalmente para democratizar el poder restringido del patronato en la fijación de las condiciones de trabajo. La democracia no ha llegado, hasta el momento, a una dimensión fundamental para la vida social: la empresa. El vehículo para ello es la convención colectiva que permite a los trabajadores incidir en múltiples aspectos de la vida cotidiana en los lugares de trabajo: ritmos, licencias, descansos, formas de seguridad e higiene, representación ante el patrono, etc. En Argentina la condición obrera sigue regida por la soberanía absoluta de la patronal que la dictadura elevó al rango de valor intocable. Los trabajadores siguen teniendo una mordaza. La garantía constitucional es para ellos letra muerta.

“Condiciones dignas y equitativas de labor...” es otro de los derechos que la constitución asegura a los trabajadores. Sin embargo la Ley de Contrato de Trabajo que las instrumentaba fue triturada por la dictadura que pudo (o modificó sustancialmente) 125 de sus 300 artículos, además de asesinar en 1977 a su autor, el jurista Norberto Centeno. Y bien: semejante estatuto restrictivo, cavernario, es el que sigue rigiendo el trabajo en este país.

La constitución asegura también —aunque nadie parezca recordarlo, ni siquiera la CGT— la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección...” ¿Qué se hizo para cumplir este mandato? Los delegados del personal y las comisiones internas que tendrían que ser los protagonistas de ese derecho a la participación siguen regidos por la ley 22.105, la ley represiva de la dictadura, sin que el gobierno haya dicho una palabra sobre esta aberración. El alfonsinismo es en este aspecto más retrógrado que los radicales de décadas atrás: López Serrot en 1948 y Yadarola en 1951 presentaron sendos proyectos legislativos sobre participación obrera. En 1965 un proyecto de Código de Trabajo implotaba consejos de empresa en todos los lugares con más de cien trabajadores.

La justicia de estos reclamos (que preceden aun a la consigna política popular de oponerse al programa del Fondo) subsiste en pie más allá del torpe y confuso lenguaje de la CGT que parece no haber aprendido todavía cómo se conjuga la defensa del sistema democrático con la crítica del gobierno sin que esa *doble acción* se convierta en *contradicción*.

Es que convertir la constitución en un rezo laico es lindo. Pero los preceptos no sólo hay que orarlos. También hay que practicarlos.

LA ECONOMÍA, TAN COMPLEJA COMO LA INTERNA PRESIONES SOBRE RIO HONDO

Ambigua para expresar sus propuestas económicas, porque los criterios técnicos se superponen a los políticos, la conducción del PJ surgida en Río Hondo trata de resistir las presiones de heterogéneos sectores que han quedado marginados del poder interno.

El peronismo viene tratando por todos los medios de definir su punto de vista sobre la economía y los temas sociales. Esa urgencia tiene que ver con los orígenes de la crisis del país y las reacciones que se vienen generando, sobre todo a partir del plan de acción de la Confederación General del Trabajo que, al cierre de esta edición, acumulaba heterogéneas adhesiones y críticas al paro, movilización y concentración del jueves 23 en la Plaza de Mayo (ver págs. 2-3).

Tan complicada como la interna política peronista parece ser la interna económica del justicialismo que, si bien tras ardua discusión emitió una declaración abierta y amplia, la semana pasada, sobre la situación económica, no acaba de sincerar sus posiciones y conciliar la realidad política con los intereses que defienden algunos profesionales que, cuando no pueden avalar técnicamente los principios pragmáticos más caros a la tradición peronista, sufren.

Hay economistas integrados a la comisión de Río Hondo que buscan eufemismos para referirse a la nacionalización del crédito y del comercio exterior o la toma de posición ante una eventual declaración de moratoria unilateral o solicitud de un período de gracia para el pago de la deuda externa ante los acreedores internacionales. Otros profesionales —como Roberto Lavagna— dudan en defender la nacionalización de los depósitos bancarios y, además, participan en reuniones —cuya índole no trasciende— con el ministro Juan Sourrouille. También Antonio Cafiero es poco claro cuando tiene que referirse a los temas que fueron la base de “la revolución inconclusa” nacida en 1946, según entienden algunos miembros de la conducción del PJ y los profesionales con mayor audacia política.

De todos modos hubo peronistas que durante esta semana tuvieron mayor decisión y se animaron a presentar un proyecto de nacionalización de los depósitos. Ese fue el caso del diputado pampeano del PJ, Jorge Mitzkin, quien con el asesoramiento del economista Saúl Bawer introdujo el documento en el que también hay ambigüedad en torno a la nacionalización del crédito. Hay otros proyectos similares en el Parlamento.

Hasta el momento los economistas del PJ —que se vienen jactando de contar en el partido con la amplia gama de profesionales del área— siguen empantanados, pero para algunos ese exceso de tecnicismo no es más que una manifestación de responsabilidad ante la magnitud de las dificultades que enfrenta el país.

SINDICATOS E INTERNA

Juntarle la cabeza a la mayoría de los economistas justicialistas fue una tarea algo más sencilla que el endemoniado trajín que tuvieron los representantes del movimiento obrero peronista para intentar la reestructuración de las 62 Organizacio-

nes. Las negociaciones se iniciaron hace más de 40 días y en ellas los 25 fueron la expresión de la conducción surgida en Río Hondo.

Lo más interesante para destacar es el acuerdo logrado en relación con el reconocimiento —por parte de los seis grupos que juegan en las 62— de los dirigentes elegidos en Térmás y sus decisiones más importantes, como la intervención y convocatoria a elecciones en el conflictivo y poderoso distrito bonaerense y el comicio interno en Capital Federal.

La dirección que encabeza Oraldo Britos viene sufriendo un sinnúmero de presiones, pero quien ha tejido la maraña más compleja y heterogénea ha sido el senador catamarqueño Vicente Leónides Saadi, quien, al parecer, quiere acceder a toda costa a la presidencia del partido en un posible tercer congreso. Para lograr este fin, quien encabezara la dura corriente de Intransigencia y Movilización, no duda en buscar aliados entre los menos potables representantes del herminismo. Curiosamente —de acuerdo con versiones confiables— adhieren a esas apetencias nombres prestigiosos como Italo Argentino Luder, Antonio Cafiero, Jorge Argentino Loder de Iglesias, Raúl Matera y el mismo Herminio; todos ellos presumen de representar a corrientes cuyo peso depende de la balanza interna.

Este sector desea llegar a un congreso unificador con acuerdos de cúpula, mientras que los grupos más progresistas de la conducción de Río Hondo —José Manuel de la Sota, Olga de Flores, Eduardo Vaca, Humberto Romero, Carlos Corach y el mismo Britos— no quieren dejar de practicar el debate y la discusión iniciada el 2 de febrero en Santiago del Estero. “Los hechos —dicen voceros de la conducción— demuestran que en 90 días de existencia ‘el consejo nacional renovador’ produjo decenas de manifestaciones políticas que superan o se comparan al valor que pueda tener el fallo judicial” que reconozca el Congreso Nacional de Río Hondo.

Los líderes del PJ que encabeza Britos desean que “la columna vertebral” del movimiento peronista, los trabajadores, puedan expresarse a través de las 62 Organizaciones y se integren en forma masiva a las estructuras partidarias en un factible congreso unificador. Pero el deseo es que la máxima expresión partidaria se reúna después de que estén normalizados los principales distritos nacionales en los cuales debe definirse la interna, mediante el voto de los militantes. En este caso, si los grupos con mayor afinidad entre los segmentos que componen al peronismo acuerdan en la realización del tercer congreso, habrá que esperar hasta agosto, fecha en la cual estarán elegidas, por los afiliados, las autoridades justicialistas metropolitanas, bonaerenses, santafesinas, mendocinas, entrerrianas y otras. Hasta entonces, el tiempo es oro y cada uno de los sectores que pretenden mantener o conquistar posiciones intentará ganar el tiempo perdido.